



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Dirección General de Transición Energética y
Economía Circular
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E INTERIOR

MEMORIA DE IDONEIDAD DEL ENCARGO “APOYO TÉCNICO 2025-2026 A LOS TRABAJOS DERIVADOS DE LA TRAMITACION DE LA LEY 21/2013 DE EVALUACION AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID”

La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, en base al DECRETO 235 /2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, es responsable de la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades, y de la tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, ambos cuando resulte competencia de la Comunidad de Madrid, así como de la participación en los procedimientos de evaluación ambiental cuya competencia esté atribuida a otras administraciones. El urgente desarrollo de energías renovables, impulsado por los objetivos de transición del sistema energético hacia uno climáticamente neutro, los nuevos proyectos de economía circular, con la incidencia de los residuos en el cambio climático al suponer una fuente difusa de emisión de gases de efecto invernadero, la correcta evaluación de las posibles actividades a desarrollar en los espacios protegidos, o la adecuada ordenación del territorio desde una perspectiva ambiental, deben tener por objeto hacer un uso eficiente de los recursos, con una apuesta estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas.

El nuevo marco regulatorio establecido por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, así las sucesivas modificaciones de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha contribuido a incrementar considerablemente las solicitudes de nuevos planes y proyectos en el territorio de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente de actuaciones relacionadas con el apremiante despliegue de proyectos del ámbito energético. Por otra parte, el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha dejado sin umbrales muchos de los epígrafes de estos anexos, habiéndose aumentado de forma importante los proyectos sometidos a procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Estas solicitudes están suponiendo, un importante incremento en el número de expedientes respecto a la tramitación ordinaria que se ha venido efectuando en la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular a lo largo de los años, máxime cuando deben ser tramitadas con las reducciones de plazos que la normativa en la materia ha ido aprobando, lo que está suponiendo unos retrasos importantes en la resolución de los diferentes procedimientos incluidos en la ley 21/2013.

En concreto, para las instalaciones fotovoltaicas, de no estar los procedimientos ambientales finalizados en los plazos establecidos por el Estado en el artículo 1, “Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad” del citado Real Decreto-ley 23/2020, las empresas perderán los muy elevados avales (40.000 €/ MW tramitado) que han debido depositar para poder acceder a la tramitación de sus expedientes.

Por otra parte, debe considerarse la entrada en vigor del DECRETO 15/2023, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid, cuya finalidad es la agilización de la tramitación de proyectos de inversión que se consideren de especial interés para la Comunidad de Madrid por su trascendencia económica, por los puestos de trabajo creados o la concurrencia de otros requisitos regulados en su artículo 8. Esta nueva normativa es de aplicación a diversos proyectos que requieren de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuya tramitación debe acelerarse reduciendo los plazos de tramitación a la mitad.

Para conseguir estos objetivos, dada la dificultad y premura necesaria para proceder a una licitación con estos condicionantes, se considera que estos trabajos han de realizarse con los medios propios de la Administración.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su Disposición adicional vigésima cuarta establece que:

4. TRAGSA y su filial TRAGSATEC prestarán, por encargo de las entidades del sector público de los que son medios propios personificados, las siguientes funciones:

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

TRAGSA y su filial TRAGSATEC también estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las entidades del sector público de las que son medios propios personificados en la consecución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los mismos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad administrativa.

Además, el art. 86.2 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público determina que las entidades integrantes del sector público institucional tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.

Así, siendo TRAGSA/TRAGSATEC una entidad que tiene la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos previstos en la mencionada disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, resulta la opción más eficiente, sostenible y eficaz, por lo que en las circunstancias que se han puesto de manifiesto, se hace totalmente imprescindible poder contar con los medios técnicos de que dispone la empresa TRAGSATEC.

Madrid, a fecha de la firma
La Directora General de
Transición Energética y Economía Circular

Firmado digitalmente por: APARICIO MAEZTU CRISTINA
Fecha: 2025.01.29 07:05